

JULIAN GUSTAVO BUSTAMANTE PEREZ, Diputado integrante de la 57 Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de mi derecho de iniciativa previsto en los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 29, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presento a esta Soberanía Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 145 del Código de Procedimientos Penales de Sonora, para el efecto de reducir el término en que deben desahogarse los procedimientos penales, al tenor de la siguiente :

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La impartición de justicia, como premisa fundamental del estado de derecho, tradicionalmente se ha entendido como la resolución de controversias entre 2 partes por un tercero ajeno a dicha controversia que en el caso particular lo constituyen las cortes, tribunales o juzgados.

No obstante, la impartición de justicia sólo consigue su fin teleológico si esta resolución, además de resolver sobre quién tiene mejor derecho, se pronuncia en un tiempo oportuno que permita evitar en lo mayor posible, los daños que se puedan causar o evitar que éstos continúen causándose mientras persista el conflicto.

Este último aspecto cobra mayor relevancia en el ámbito penal, toda vez que mientras se resuelve la controversia, la parte acusada puede durante el proceso, permanecer privada de su libertad, causándole de momento a momento, mientras dure el proceso, un daño irreparable como lo es la privación de su libertad.

Ahora bien, si bien es cierto que en principio el término en que debe desahogarse todo procedimiento penal debe ser lo más breve posible para garantizar una impartición de justicia pronta y expedita, no menos cierto es que dicho procedimiento debe desahogarse en un tiempo adecuado que garantice un proceso en donde puedan aportarse y desahogarse todos los elementos de prueba necesarios para que el juzgador norme su criterio y emita un juicio justo al dictar su resolución.

Entran así en aparente conflicto dos garantías fundamentales: la impartición de justicia expedita y el derecho a contar con una defensa adecuada.

Obvio es que debe encontrarse un equilibrio.

En este contexto, la Constitución Federal establece como garantía del inculpado en todo proceso penal, el ser juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

Congruente con esta disposición constitucional nuestro Código de Procedimientos Penales establece:

“Artículo 145.- La instrucción (penal) deberá terminarse en el menor tiempo posible. Cuando exista auto de formal prisión y el delito tenga señalada una sanción máxima que exceda de dos años de prisión, se terminará dentro de ocho meses; si la sanción máxima es de dos años de prisión o menor, o se hubiere dictado auto de sujeción a proceso, la instrucción deberá terminarse dentro de tres meses, bajo responsabilidad del Juez.

...”

Del análisis histórico de dicha normas se observa que la garantía constitucional referida en párrafos anteriores data desde 1917, esto es, tiene cerca de 90 años de vida; en tanto las disposiciones del Código Procesal fueron aprobadas desde 1949, lo que arroja una vigencia de 56 años.

Podemos entonces concluir que los procesos penales en Sonora se desahogan en el mismo lapso que hace 56 años.

Ahora bien, por las características propias de los procesos penales, el uso de técnicas de investigación científicas y tecnológicas constituyen no sólo una herramienta necesaria sino además indispensable para acreditar determinadas conductas o hechos delictivos.

Ello en virtud de que los adelantos científicos y tecnológicos no sólo han permitido elevar la seguridad en lo referente a la valoración de pruebas científicas que permiten al juzgador conocer la verdad de los hechos, sino que además el tiempo de desahogo de dichas pruebas se ha visto reducido considerablemente.

Por ello, la implementación de estas herramientas científicas y tecnológicas como lo son equipos de computo, modernización de medios de comunicación (internet, videos), pruebas de DNA, etc, han contribuido a que las diligencias en los juzgados sean eficaces, reduciendo de esta manera los tiempos de los procesos.

Sin embargo y no obstante que ahora las pruebas y en general los procesos penales se desahogan en menor tiempo que hace algunos años, ello no se ha visto reflejado en el tiempo en que una persona debe ser sentenciada, pues aún cuando los medios de prueba se agotan más rápido, el tiempo señalado en la ley como máximo para acabar con los procesos es igual que hace 10, 20 o 50 años.

No son pocas las ventajas que se obtendrían de aprobar las reformas que hoy se proponen, tanto para el Estado como para las partes, entre las que destacan las siguientes:

- No se afecta el ofrecimiento ni desahogo de pruebas
- Se disminuye la prisión preventiva
- Se da certeza a la situación del procesado al dictarse sentencia en menos tiempo
- Se agiliza el pago de la reparación del daño, lo que favorece a la víctima u ofendido del delito

En síntesis se da un paso más en la impartición de justicia expedita sin menoscabo de la garantía de una defensa adecuada, consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, a favor de toda persona.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SONORA

ARTICULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 145 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora para quedar como sigue:

ARTÍCULO 145.- La instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible. Cuando exista auto de formal prisión y el delito tenga señalada una sanción máxima que exceda de dos años de prisión, se terminará dentro de seis meses; si la sanción máxima es de dos años de prisión o menor, o se hubiere dictado auto de sujeción a proceso, la instrucción deberá terminarse dentro de dos meses, bajo responsabilidad del Juez.

...

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ATENTAMENTE

Hermosillo, Sonora, a 29 de junio de 2006

C. DIP. JULIAN GUSTAVO BUSTAMANTE PEREZ